

9ª REUNIÓN — 5ª SESIÓN ORDINARIA — 26/27 DE JUNIO DE 1983

**Presidencia del señor vicepresidente de la Nación,
doctor VÍCTOR HIPÓLITO MARTÍNEZ;**

**del señor presidente provisional del Honorable Senado,
doctor EDISON OTERO;**

**del señor presidente de la Comisión de Interior y Justicia,
doctor CELESTINO A. MARINI,**

**y del señor presidente de la Comisión de Legislación General,
doctor ALBERTO J. RODRÍGUEZ SAA**

Secretarios: doctores ANTONIO J. MACRIS y LEONARDO JUSTO PALOMEQUE

Prosecretarios: doctor ALBERTO J. B. IRIBARNE y señor DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN

SENADORES PRESENTES:

ALMENDRA, Ramón A.
BENITEZ, Alfredo L.
BERHONGARAY, Antonio T.
BRASESCO, Luis A. J.
BRAVO HERRERA, Horacio F.
BRITOS, Oraldo N.
CASTRO, Jorge A.
CELLI, Felipe
CONCHEZ, Pedro A.
DE LA RÚA, Fernando
FALSONE, José A.
FERIS, Gabriel
GASS, Adolfo
GIL, Francisco
GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.
GURDULICH de CORREA, Liliana I.
JIMÉNEZ MONTILLA, Arturo
LAFFERRIERE, Ricardo E.
LEÓN, Luis A.
MARINI, Celestino A.
MARTIARENA, José H.
MATHUS ESCORIHUELA, Miguel A.
MAUHUM, Fernando H.
MAZZUCCO, Faustino M.

MENEM, Eduardo
MURGUÍA, Edgardo P. V.
NAPOLI, Antonio O.
NIEVES, Rogelio J.
OTERO, Edison
RIVAS, Olijela del Valle
RODRÍGUEZ SAA, Alberto J.
SAADI, Vicente L.
SALIM, Luis
SÁNCHEZ, Libardo N.
SOLANA, Jorge D.
TRILLA, Juan
VELÁZQUEZ, Héctor J.
VIDAL, Manuel D.
VILLADA, Francisco R.
WOODLEY, Kenneth W.

AUSENTES, CON AVISO:

AMOEDO, Julio A.
BITTEL, Deolindo F.
LECONTE, Ricardo G.
MAIHARRO de TORRES, Margarita
SAPAG, Elías
SIGAL, Humberto C.

SUMARIO

1. Asuntos entrados:

- I. Comunicaciones de la Presidencia. (Página 697.)
- II. Mensaje del Poder Ejecutivo por el que solicita acuerdo. (Pág. 697.)
- III. Comunicación de la Presidencia de la Nación. (Pág. 697.)
- IV. Comunicaciones oficiales. (Pág. 697.)
- V. Dictámenes de comisiones. (Pág. 697.)
- VI. Peticiones particulares. (Pág. 698.)
- VII. Proyecto de comunicación del señor senador Gil por el que se solicita la inclusión de una partida para el zoológico y acuario de San Juan en el presupuesto de 1986. (Pág. 698.)
- VIII. Proyecto de comunicación del señor senador Castro por el que se solicita la firma de un protocolo adicional interpretativo del Acta de Colonia. (Pág. 698.)
- IX. Proyecto de comunicación del señor senador Gil por el que se solicita la reglamentación de títulos profesionales otorgados por universidades estatales y privadas. (Página 699.)
- X. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes acerca del servicio de teleprocesamiento de textos y gráficos a través de la red telefónica. (Pág. 700.)
- XI. Proyecto de comunicación del señor senador Britos por el que se solicitan informes acerca de las conclusiones de la Comisión de Estudio de los concursos públicos de adjudicación de licencias de radiodifusión. (Pág. 701.)
- XII. Proyecto de comunicación del señor senador Marini por el que se solicita se declare de interés nacional la obra Paraná Medio, construcción del cierre sur Chapetón y disposiciones complementarias. (Pág. 701.)
- XIII. Proyecto de declaración del señor senador Saadi sobre transferencia de parcelas a la provincia de Catamarca. (Pág. 702.)
- XIV. Proyecto de comunicación de los señores senadores Rivas y Marini por el que se solicitan informes acerca del retiro de un busto del ex presidente Juan Domingo Perón. (Pág. 703.)
- XV. Proyecto de declaración de los señores senadores Rivas y Marini por el que se expresa interés en la reposición de un busto

del ex presidente Juan Domingo Perón en la Universidad Tecnológica Nacional. (Página 703.)

- XVI. Proyecto de ley del señor senador Salim por el que se prohíbe la exportación de vagones ferroviarios de carga fabricados en el país. (Pág. 705.)
 - XVII. Proyecto de comunicación del señor senador Nápoli y otros señores senadores por el que se solicita la equiparación de jubilaciones de profesores de escuelas privadas con los docentes estatales. (Pág. 705.)
 - XVIII. Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez y otros señores senadores por el que se solicita una rebaja para el tráfico radiotelefónico con estaciones en la Antártida. (Pág. 706.)
 - XIX. Proyecto de comunicación del señor senador Velázquez y otros señores senadores por el que se solicitan créditos para viviendas destinadas al personal de bases antárticas. (Pág. 706.)
2. Moción de preferencia del señor senador Trilla para considerar en la próxima sesión el proyecto de ley en revisión sobre gravámenes a depósitos bancarios. Se aprueba. (Pág. 707.)
 3. Homenajes rendidos por varios señores senadores a la memoria del general Martín Miguel de Güemes, de Carlos Gardel, y al 50º aniversario del Protocolo de la Paz del Chaco. (Pág. 707.)
 4. Moción de preferencia formulada por el señor senador Britos para considerar en la próxima semana con despacho de comisión o sin él, el proyecto de comunicación del que es autor por el cual se solicitan informes a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre cuatro acordadas referidas a los paros realizados por los trabajadores judiciales. Se aprueba. (Pág. 716.)
 5. Consideración del proyecto de ley en segunda revisión por el que se delega en la Corte Suprema de Justicia y en el Poder Ejecutivo nacional la facultad de fijar sus remuneraciones. Se aprueba la sanción de la Honorable Cámara de Diputados. (Página 716.)
 6. Consideración del proyecto de ley del señor senador Villada y otros señores senadores por el que se establece un régimen transitorio de coparticipación federal de impuestos. Se aprueba. (Pág. 733.)
 7. Moción del señor senador Nápoli de pasar a cuarto intermedio hasta mañana a las 17. Se rechaza. (Página 744.)
 8. Consideración del dictamen de las comisiones de Combustibles y de Energía en el proyecto de declaración del señor senador Nieves por el cual se solicita un subsidio para el Ministerio de Obras Públicas de Formosa. Se aprueba como proyecto de comunicación. (Pág. 745.)

9. Consideración del proyecto de declaración del señor senador Martiarena y otros señores senadores referido a las facultades del Congreso de la Nación con respecto al decreto 1.096/85, sobre creación del nuevo signo monetario denominado "austral". No se vota por falta de quórum. (Pág. 746.)

10. Apéndice:

Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 777.)

—En Buenos Aires, a las 17 y 43 del miércoles 26 de junio de 1985:

Sr. Presidente. — Queda abierta la sesión.

I

ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente. — Por Secretaría se va a dar cuenta de los asuntos entrados.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

I

Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 18 de junio de 1985, por el que se declaran, junto con la Honorable Cámara de Diputados, huéspedes oficiales del Honorable Congreso de la Nación al señor jefe de la Delegación Parlamentaria de Corea del Sur y secretario de la Comisión Permanente de Relaciones Exteriores, y a los miembros integrantes de ella. (A sus antecedentes.)

—Decretos del 19 de junio de 1985, por los que se aceptan y agradecen las donaciones sin cargo al Honorable Senado, efectuadas por los pintores Juan Carlos Durán, Raquel Palumbo, Enrique Nani, Angel Ladadaga, Nelly Alvarez y Dignora Pastorello, de obras de su producción. (A sus antecedentes.)

—Comunica que el señor senador Berhongaray ha elevado un informe sobre su reciente viaje a la República Federal de Alemania, Noruega y España, que contiene temas referentes a energía nuclear, deuda externa, satélites, unidades de combate, organización militar, relaciones bilaterales, electrónica y aspectos generales de defensa, y cuyos antecedentes se encuentran a disposición de los señores senadores en la Presidencia.

—Comunica que ha tomado conocimiento del informe elevado por la comisión de funcionarios que concurrió a las IX Jornadas Argentinas y I Jornada del Norte Argentino de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)

II

Acuerdo

Mensaje del Poder Ejecutivo en el que solicita acuerdo. (A la Comisión de Acuerdos.)

III

Comunicación de la Presidencia de la Nación

Acusa recibo de la comunicación sobre declaración de interés nacional del "Segundo Congreso Nacional de Vivienda Rural". (A sus antecedentes.)

IV

Comunicaciones oficiales

La Municipalidad de San Rafael, Mendoza, solicita el desbloqueo de volúmenes de vinos provenientes de viñedos afectados por diversos factores. (A la Comisión de Comercio.)

—La Subsecretaría de Trabajo y Seguridad Social de Mendoza envía anteproyecto de ley por el que se instituye la libreta de trabajo. (A la Comisión de Trabajo y Previsión Social.)

—La Legislatura de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur envía resolución por la que se crea una comisión legislativa para solicitar la provincialización territorial. (A la Comisión de Asuntos Constitucionales.)

—El Concejo Deliberante de Clorinda, Formosa, adhiere a los proyectos de ley sobre transferencia de tierras fiscales. (A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Defensa Nacional.)

—La Municipalidad de Vicente López adhiere a la participación de los municipios en lo recaudado para el FONAVI. (A sus antecedentes.)

—La gobernación de la provincia de Buenos Aires envía declaración del Senado provincial por el que solicita la derogación de la ley 22.250 (Régimen laboral para el personal de la industria de la construcción). (A sus antecedentes.)

—La Municipalidad de Berisso, Buenos Aires, envía resolución referente a la liquidación del Banco de Berisso Cooperativo. (A la Comisión de Economía.)

—El Concejo Deliberante de La Matanza, Buenos Aires, envía declaración en la que se solicita la reactivación de las industrias metalúrgicas SIAM. (A las comisiones de Asuntos Administrativos y Municipales y de Industria.)

—El Concejo Deliberante de Clorinda, Formosa, adhiere al proyecto de ley referente a jubilaciones para trabajadores en zonas de fronteras. (A las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Defensa Nacional.)

V

Dictámenes de comisiones

ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y MUNICIPALES, DE ASUNTOS CONSTITUCIONALES Y DE PRESUPUESTO Y HACIENDA:

En el proyecto de ley de los señores senadores Menem y Sánchez por el que se instituye la "Defensoría del Pueblo" en el ámbito del Congreso de la Nación. (Al orden del día.)

ASUNTOS CONSTITUCIONALES:

En el proyecto de ley del señor senador Villada y otros señores senadores, por el que se modifica la ley

Cámara, si la bancada de la Unión Cívica Radical accedía a insistir en la sanción anterior del Senado.

Se ha hecho referencia, con mucho acierto, a que hay un sistema que ha muerto y que ésta no es una cuestión coyuntural. Ni siquiera es una situación estructural. Aquí se impone un cambio de sistema, de estructuras, si es que queremos salir de esta situación tan difícil y afligente para el país.

Con parches, con aspirinetas, no se resuelve este problema, sino con medidas serias, de fondo, revolucionarias, capaces de dar respuesta a esta situación que nos aflige, abriendo de par en par las puertas de la esperanza para motivar al pueblo argentino a trabajar unido para salvar a la patria.

Sin perjuicio de que esto lo diga con carácter general, quiero acudir al patriotismo de los señores senadores representantes de las autonomías provinciales. No me llama la atención la postura del señor senador por la Capital, porque no tiene las responsabilidades específicas en la materia que tenemos los senadores de las provincias, quienes debemos abogar para que tengamos una justicia bien remunerada en la medida de lo posible. Pero una sola justicia; no una justicia de primera y una justicia de segunda.

Las provincias, por lo menos las peronistas, no están en condiciones de resolver el problema de los sueldos de los empleados de la justicia. Es más: creo que casi todas están imposibilitadas de resolverlo.

Bien se ha dicho aquí que se va a crear una agitación social que no va a beneficiar a nadie. Por eso acudo a los representantes de las provincias para que, sobre las banderías partidarias, demos una solución justa para una sola justicia y que mantengamos la sanción anterior de este cuerpo que contemplaba la posibilidad de que las provincias puedan resolver el problema igual que la Nación.

Por otra parte, con respecto a la modificación que se refiere a la cuestión del personal, entiendo que una razón superior de justicia y de humanidad nos obliga a mantener dicha sanción.

Por las circunstancias expuestas, señor presidente, dejo fijada oficialmente la postura del bloque de senadores justicialista, que insistirá en la sanción del Senado. (Aplausos.)

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Señor presidente, señores senadores: en mérito a las expresiones vertidas por los representantes de este bloque, nuestra bancada insistirá en la sanción con el texto tal como

Sr. Presidente. — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar si el Honorable Senado insiste en su sanción.

—La votación resulta negativa. (Aplausos.)

Sr. Presidente. — Queda definitivamente sancionado el proyecto de ley venido de la Honorable Cámara de Diputados. Se comunicará al Poder Ejecutivo.

6

REGIMEN TRANSITORIO DE COPARTICIPACION FEDERAL DE IMPUESTOS

Sr. Presidente. — Corresponde considerar el proyecto de ley del señor senador Villada y otros señores senadores por el que se establece un régimen transitorio de coparticipación federal de impuestos, de acuerdo con la moción de preferencia aprobada en la sesión anterior.

Tiene la palabra el señor senador por la Capital Federal.

Sr. Trilla. — Señor presidente, señores senadores: si bien es cierto que había sido aprobada la moción de preferencia para el tratamiento de este proyecto firmado por la mayoría de la bancada justicialista, quiero expresar que ante las circunstancias de conocimiento público, ya han sido cursadas las invitaciones del caso para que este tema sea tratado en primer lugar en el Ministerio de Economía —que es donde corresponde debido a que es un problema de financiación de las provincias—, con los señores gobernadores. A posteriori, el presidente de la República se reunirá con los gobernadores de cada una de las provincias, ampliando la invitación a los señores senadores y diputados que tengan atinencia con el problema presupuestario, directamente afectado por disposiciones de esta naturaleza.

Por lo expuesto, solicito que el tratamiento de este proyecto sea diferido para la primera sesión de la próxima semana.

Sr. Presidente. — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

Sr. Saadi. — Señor presidente: esta cuestión ya ha sido tratada en la sesión anterior, oportunidad en que el señor senador por la Capital manifestó las mismas razones que acaba de expresar. En dicha sesión, la Cámara resolvió considerar el proyecto en esta sesión. Nuestro bloque sostiene, por decisión unánime de sus miembros, que el proyecto debe ser tratado ahora. Conocen la planilla que ha hecho circular el señor ministro del ramo y no la comparten.

Por lo expuesto, no aceptamos la postergación y solicitamos que el proyecto sea considerado en esta sesión.

Sr. Presidente. — Se va a votar la moción formulada por el señor senador Trilla de postergar la consideración del proyecto hasta la próxima sesión.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente. — Por Secretaría se dará lectura.

Sr. Secretario (Macris). — (Lee)

PROYECTO DE LEY

El Senado y Cámara de Diputados, etc.

Artículo 1º — Establécese un régimen transitorio de participación en el producido de los impuestos nacionales por parte de las provincias, con vigencia para el ejercicio fiscal 1985, y hasta tanto se sancione el nuevo régimen de coparticipación federal de impuestos.

Art. 2º — En virtud de lo establecido en el artículo 1º, el Tesoro nacional transferirá a las ciudades jurisdiccionales, durante el año 1985, quinientos diez mil millones de pesos (\$a 510.000.000.000), de acuerdo a la distribución de la planilla anexa que forma parte de la presente ley.

Dicho importe comprende los conceptos de coparticipación federal de impuestos, coparticipación para los sistemas de seguridad social provinciales y aportes no reintegrables del Tesoro nacional, sin afectación a programas específicos que existieran hasta el 31 de diciembre de 1984 y prorrogados o habilitados para el presente ejercicio 1985, programas éstos que no quedan afectados por esta ley ni cuyas remesas por estos conceptos son deducibles, en ningún caso, de las sumas que se determinen, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3º a 7º de esta ley.

Art. 3º — Por los conceptos a que se refiere el artículo anterior, el Poder Ejecutivo deberá efectuar a cada provincia las siguientes transferencias:

- Diariamente, la suma que corresponda por la recaudación de los ingresos comprendidos dentro de los conceptos de coparticipación, en la proporción establecida por cada provincia en la planilla anexa;
- Durante el mes y hasta el antelúltimo día hábil del mismo, la suma necesaria para completar la dozava parte del total fijado en el artículo 2º. Esta dozava parte se determinará incrementando su monto con la actualización que se establece en el artículo siguiente.

Art. 4º — La actualización de los importes mensuales señalados en el artículo 3º deberá realizarse mediante la aplicación de un índice que se elaborará en base a lo que se establece a continuación. El valor base de dicho índice surgirá del promedio del registro correspondiente al mes de noviembre de 1984 en los índices de precios al por mayor, nivel general, y de precios al consumidor, nivel general, elaborados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos, ponderados por 1/3 y 2/3 respectivamente. El componente variable

del índice, o sea el numerador, será el promedio de los registros de los citados índices, con idéntica ponderación, referidos al mes inmediato anterior al que corresponda la cuota de transferencia o al de su efectiva remesa, el que sea posterior.

En el caso de que se exceda el plazo establecido en el artículo 3º, el valor actualizado de las cuotas será incrementado, además, en el porcentual que establece el Banco Central de la República Argentina para los atrasos o incumplimientos de los bancos provinciales en sus obligaciones para con aquél.

Art. 5º — La presente ley se aplicará a partir del 1º de enero de 1985. Dentro de los ciento veinte (120) días corridos a partir de la fecha de sanción de la presente ley, el Poder Ejecutivo transferirá a los provincias las diferencias que pudieran existir entre los valores mensuales determinados de acuerdo con el presente régimen y los fondos efectivamente enviados por los conceptos a los que se refiere el artículo 2º.

Dichas diferencias se actualizarán según el procedimiento establecido en el artículo 4º, empleando al efecto, y para cada mes transcurrido, los índices promedios utilizados para el cálculo correspondiente a cada uno de tales meses y el del mes en el que se salden las diferencias. En caso de excederse el plazo establecido en el presente artículo, se incrementarán los importes de acuerdo a lo determinado en la última parte del artículo 4º.

Art. 6º — El Tesoro nacional contribuirá en su totalidad al financiamiento de los déficit presupuestarios de las provincias correspondientes al ejercicio fiscal 1984 mediante un aporte no reintegrable.

Art. 7º — El monto resultante del artículo 6º será transferido dentro de los ciento veinte (120) días de promulgada la presente ley, conjuntamente con la actualización e incremento por mora, que se realizará de acuerdo a lo establecido en el artículo 4º.

Art. 8º — Autorízase al Poder Ejecutivo a ampliar los créditos presupuestarios pertinentes, a los fines del cumplimiento de la presente ley, quedando facultado a modificar el resultado del ejercicio, como asimismo, a hacer uso de los mecanismos de corto plazo de la Tesorería General hasta tanto se ponga en ejecución el presupuesto general de la administración nacional para 1985, en que se procederá a la imputación correspondiente.

Art. 9º — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Francisco R. Villada. — Vicente L. Saadi.
— Elias Sapag. — Manuel D. Vidal. —
Oraldo N. Britos. — Eduardo Menem.
— Edgardo P. V. Murguía. — Lilitana I. Gurdulich de Correa. — Otilija del Valle Rivas. — Luis Salim. — Ramón A. Almendra. — Julio A. Amoedo. — Ramón A. Araujo. — Alfredo L. Benítez. — Deolindo F. Bittel. — Jorge A. Castro. — Pedro A. Conchez. — Celestino A. Marini. — José H. Martiarena. — Rogelio J. Nieves. — Alberto J. Rodríguez Sad. — Libardo N. Sánchez.

PLANILLA ANEXA AL ARTICULO 2º

Jurisdicción	Monto a transferir durante 1985
Buenos Aires	\$a 88.954.810.000
Catamarca	" 14.869.620.000
Córdoba	" 47.379.640.000
Corrientes	" 19.985.460.000
Chaco	" 26.346.800.000
Chubut	" 10.119.130.000
Entre Ríos	" 26.346.800.000
Formosa	" 19.606.690.000
Jujuy	" 15.181.180.000
La Pampa	" 10.119.130.000
La Rioja	" 11.172.570.000
Mendoza	" 20.498.150.000
Misiones	" 17.804.390.000
Neuquén	" 10.119.130.000
Río Negro	" 13.060.850.000
Salta	" 20.646.730.000
San Juan	" 18.210.370.000
San Luis	" 12.334.570.000
Santa Cruz	" 10.119.130.000
Santa Fe	" 49.513.880.000
Santiago del Estero	" 22.291.010.000
Tucumán	" 26.787.060.000
Total	\$a 510.000.000.000

FUNDAMENTOS

Señor presidente:

El 31 de diciembre de 1984 terminó la vigencia de la ley de Coparticipación Federal de Impuestos 20.221. No existe en la actualidad ninguna norma legal que regule, distribuya y armonice la relación financiera proveniente del poder de imposición entre el Estado federal y cada una de las jurisdicciones locales que componen la Nación.

El sistema federal de gobierno, instituido en la Constitución Nacional, exige definir la certeza y las relaciones entre los Estados; en especial las relacionadas con los aspectos económicos que hacen a su posibilidad de crecimiento o regresión; esplendor o fracaso de las regiones.

El presente proyecto tiene por objeto reglar un sistema provisorio y de emergencia, que permita subsistir a las provincias durante 1985, lapso en el cual se instrumentará la norma o ley-convenio entre los estados.

Por otra parte, los aspectos cuantitativos son fiel reflejo del acuerdo entre los titulares de los Poderes Ejecutivos nacionales y provinciales, celebrado en la ciudad de Buenos Aires, el 8 de enero de 1985.

El proyecto aspira, asimismo, a cubrir temporariamente un vacío legislativo que implica de hecho una delegación de facultades al Poder Ejecutivo para el cumplimiento de sus funciones. Es así que, por disposiciones tales como el decreto 28/85 y medidas de corto plazo que autorizan débitos a las cuentas del Tesoro nacional, se están transfiriendo recursos de carácter coparticipable a las provincias. Pero las magnitudes de las mismas, no se compadecen con las mínimas e imprescindibles necesidades de dichas jurisdicciones.

El antedicho régimen permitirá cumplir de manera correcta el acuerdo alcanzado, como asimismo permitir a

los gobiernos provinciales eliminar la incertidumbre relativa al monto de los recursos a su disposición, para de esta manera planificar una más eficiente acción de gobierno.

El presente régimen tendrá vigencia hasta tanto se apruebe el nuevo régimen de coparticipación federal.

Francisco R. Villada. — Vicente L. Saadi. —
Elias Sapag. — Manuel D. Vidal. —
Oraldo Britos. — Francisco Gil. — Eduardo Menem. — Edgardo P. V. Murguía. —
Liliana I. Gurdulich de Correa. — Rogelio J. Nieves. — Otilia del Valle Rivas. —
Luis Salim. — Ramón A. Almendra. —
Julio A. Amoedo. — Ramón A. Araujo. —
Alfredo L. Benítez. — Deolinda F. Bittel. —
Jorge A. Castro. — Pedro A. Conchez. —
José H. Mariarena. — Celestino A. Marini. —
Alberto J. Rodríguez Saá. — Libardo N. Sánchez.

Sr. Presidente. — En consideración en general. Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada. — Deseo fundamentar la posición de mi bloque respecto de este importante tema. Podría decir, señor presidente y señores senadores, que los fundamentos que acompañan a este proyecto de coparticipación federal de impuestos y de distribución de recursos que realiza la Nación, a través de lo que se conoce como el sistema de los ATN, contienen las razones suficientes y valederas como para que nosotros prestemos sanción a este régimen y contribuyamos, definitiva y decididamente, a encontrar de una buena vez por todas la solución a esta difícil situación por la que atraviesan nuestras provincias.

—Ocupa la Presidencia el señor presidente provisional del Honorable Senado, senador Edson Otero.

Sr. Villada. — En efecto, en los fundamentos de la ley decimos que el 31 de diciembre de 1984 concluyó la vigencia de la ley de coparticipación federal de impuestos, que lleva el número 20.221.

Por lo tanto no existe, señores senadores, una norma legal que regule, distribuya y armonice la relación financiera proveniente del poder de imposición que tiene el Estado nacional frente a cada una de las jurisdicciones provinciales.

Es importante, señores senadores, que sepamos que en este momento no tenemos una norma legal suficiente que regule esta situación entre el Estado nacional y los provinciales. Y, frente a esta situación, también es cierto y palpable que los únicos que pagan las consecuencias son todos nuestros estados provinciales.

También decíamos en los fundamentos de esta ley que el sistema federal de gobierno instituido por la Constitución Nacional exige definir con certeza las relaciones entre los estados, en especial aquellas que tienen vinculación con el aspecto económico. Ello es así porque del apoyo nacional, en muchos casos y para muchas provincias, está dependiendo su crecimiento o regresión, el hecho de que podamos seguir transitando o el propio fracaso de los gobiernos provinciales.

También decíamos en los fundamentos de nuestro proyecto de ley, que tiene por objeto reglar un sistema provisorio de emergencia que permita a las provincias poder subsistir hasta el 31 de diciembre del corriente año. Si se discutieran todos los aspectos referentes al sistema de coparticipación, como lo pretende el señor senador por la Capital, seguramente nos insumiría meses de trabajo, con lo cual llegaríamos a fin de año sin concluir este tema.

Por eso atribuimos importancia a este régimen provisorio de coparticipación.

Decimos también en los fundamentos que el Poder Ejecutivo, a través de un decreto, pretendió dar solución a este problema. Pero únicamente hizo referencia al sistema de coparticipación de los impuestos que recauda la Nación, no mencionando para nada a la ayuda federal, es decir, la participación que le corresponde a las provincias por los impuestos que percibe y recauda la Nación, a través del proceso de emisión que ella maneja.

Creo que los fundamentos contenidos en el proyecto son suficientes para que nos aboquemos al análisis de la cuestión y prestemos aprobación a la propuesta, sacando así a las provincias del actual marasmo en que se encuentran, dando un poco de orden y prolijidad al manejo de los recursos que la Nación tiene en sus manos.

En consecuencia, se desprende que tenemos dos temas fundamentales para considerar: uno se refiere concretamente al endeudamiento que traemos por arrastre del ejercicio 1984; el otro está vinculado con el monto de los recursos que necesitan las provincias que, en función de los acuerdos y conversaciones mantenidos con el señor presidente de la República, se han establecido casi definitivamente en una cifra que está en el orden de los 510.000 millones de pesos.

El primer aspecto, referido a los déficit correspondientes al ejercicio 1984, merece hacer un poco de historia, por lo que me referiré a lo que nosotros dijimos cuando tratamos el presupuesto

bancada justificó sus peticiones señalando que las provincias necesitaban un apoyo de la Nación de 30.000 millones de pesos.

Decíamos a los señores senadores que el presupuesto para 1984 había sido preparado con una pauta inflacionaria que la Secretaría de Hacienda había estimado para el mes de junio. De acuerdo con dichas pautas, las cifras del presupuesto correspondiente a 1983 debían actualizarse, aproximadamente, con un coeficiente de 2,50. Nosotros exhibimos en este recinto el estudio que habíamos realizado en función de lo que venía aconteciendo en el país, en materia inflacionaria, hasta el mes de agosto. Nuestras estimaciones para el período septiembre/diciembre de 1984 fueron tenues y señalamos categóricamente que el coeficiente de actualización debía ser de 3,15. La diferencia entre ambos coeficientes de actualización implicaba una deficiencia presupuestaria, para el apoyo que la Nación debía dar a las provincias, que estaba en el orden de los 30.000 millones de pesos, que fue lo que solicitamos en aquel entonces a los señores senadores, en cuanto a lo que la ley de presupuesto para 1984 debía contener en concepto de apoyo de la Nación como ayuda federal.

No fuimos entendidos, y dijimos más todavía. Exhibimos una planilla preparada por la Secretaría de Hacienda, donde el Apoyo por Coparticipación, Ayuda Federal, Apoyo para el Sistema de Seguridad Social y muchos otros apoyos previstos en el presupuesto nacional para las provincias oscilaban en los 300.000 millones de pesos, que con el error que contenía de aproximadamente un 30 por ciento, implicaba una insuficiencia presupuestaria para nuestros Estados provinciales del orden de los 100.000 millones de pesos.

Recordemos esta cifra. Lo dijimos en este recinto: no podrán nuestras provincias soportar este desfase. Así parece que resultó finalmente.

Señores senadores: hoy, después de haber transcurrido el año 1984, hemos efectuado el estudio de lo qué sucedió con nuestro presupuesto de ese año. En él se habían previsto las siguientes cifras: por Recursos de Coparticipación Federal, 86.000 millones de pesos, y por Aportes del Tesoro nacional, 121.000 millones de pesos; es decir, un total de 207.000 millones de pesos.

Ahora, veamos lo que aconteció en 1984 a la luz de los índices de inflación que ya poseemos. Ese monto que acabo de señalar, de 207.000 millones de pesos, ha sido tomado sobre la base de los precios promedio a junio de 1984. Si actualizamos ese importe a los precios promedio reales de 1984, concluimos que esta cifra debería haber sido de 270.000 millones de pesos.

Ahora bien. Veamos cuánto giró la Secretaría de Hacienda a nuestras provincias: por coparticipación, 94.000 millones y por aporte del Tesoro nacional, 122.000 millones; es decir, un total de 216.000 millones de pesos, que frente a los 270.000 millones, nos da una diferencia de 54.000 millones que nuestras provincias han dejado de recibir.

Pero con esto no termina el problema, porque esta cifra de 54 mil millones de pesos está expresada en función del promedio de los índices de 1984. Si queremos reflejarla en valores al 31 de diciembre de ese año, la actualización nos da exactamente 119 mil millones de pesos.

Observen que cuando considerábamos el presupuesto nosotros pronosticamos un déficit de 100 mil millones de pesos, y del análisis efectuado con los índices reales de 1984 surge que las provincias han recibido 119 mil millones de pesos menos.

Convendría tal vez que nos detengamos a analizar las causas fundamentales de este endeudamiento que tienen las provincias. Yo diría que se produce, en primer término, por la falencia en la recaudación y por deficiencias en los mecanismos que maneja el Poder Ejecutivo nacional. En segundo lugar, por la incorrecta determinación de las bases de imposición. Sirva de ejemplo para corroborar lo que estoy diciendo un dato nada más: observen que por impuesto a las ganancias la Nación recauda 350 millones de dólares. Cuando comentábamos el año pasado con el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda estas cuestiones decíamos que nuestro drama eran 10 mil millones de dólares. Observen que los "ricos" de este país, los que ganan, aportan a nuestro problema nacional 350 millones de dólares.

Esta es la otra causa por la cual la Nación, frente a estas presiones, busca transferir sus problemas un poco a otras variables donde no tenga que soportar el peso.

También deseo expresar que el endeudamiento en el que están inmersas nuestras provincias obedece al deficiente sistema de giro que utiliza la Secretaría de Hacienda, la que envía los fondos sin ningún orden determinado y retrasó los pagos. Cada retraso representa para las provincias un mayor endeudamiento porque lo que hoy no podemos pagar lo tenemos que hacer dentro de treinta días indexado y con el interés correspondiente; por su parte, lo que no pudimos comprar hoy lo adquirimos dentro de treinta días soportando el índice de inflación correspondiente al mes respectivo.

Como podemos observar, tenemos dos cifras: una que pronosticamos y otra que surge del análisis

de la realidad. En un artículo que acaba de aparecer en un diario especializado de esta Capital se da a conocer las cifras que tiene en este momento la Secretaría de Hacienda, según las cuales el déficit de las provincias alcanza a 104 mil millones de pesos. Observen qué sorprendente coincidencia: pronosticamos 100 mil millones, del análisis de la realidad surge la cifra de 119 mil millones y las provincias están solicitando entre todas 104 mil millones de pesos. Quiere decir, señores senadores, que no estábamos desacertados cuando decíamos que teníamos que utilizar la facultad constitucional de que disponemos para acudir en apoyo de nuestras provincias elevando en 30 mil millones de pesos el aporte y hoy no tendríamos que estar tratando de apoyar a las provincias con 104 mil millones de pesos. El problema que evidentemente era simple en cuanto a su monto en septiembre del año pasado se ha complicado totalmente en la actualidad. De todas maneras, tenemos que darle una solución, y en este sentido, tanto el Poder Ejecutivo como los funcionarios de la Secretaría de Hacienda, e inclusive el señor presidente de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, han expresado que existe el mejor de los ánimos para quitar este arrastre que tienen las provincias buscando una forma de solución que permita transitar con algo más de tranquilidad hacia adelante.

Hasta aquí, entonces, queda analizado el tema de los déficit que traen las provincias en la ejecución de sus presupuestos, que significan en estos momentos un gran endeudamiento, a los que se les siguen acumulando los índices de actualización y diariamente todos los intereses devengados por nuestra imposibilidad de pago.

Quisiera referirme al segundo de nuestros temas, que es el apoyo para 1985. El señor presidente de la Nación dio una cifra con la que tal vez podríamos dar solución a nuestros problemas provinciales. Si nos conformáramos todos, senadores y gobernadores, con recibir exactamente el mismo apoyo previsto para 1984, tendríamos que hablar de 594.000 millones de pesos al 31 de diciembre. Si nos atenemos a lo sucedido, es decir a lo que nos mandó la Secretaría de Hacienda, deberíamos hablar de 474.000 millones, pero debemos recordar que nos mandaron 100.000 millones de menos. Repito, eran 594.000 millones si nos conformábamos con un apoyo igual al de 1984; pero nos mandaron 100.000 millones de pesos menos, y si nos tuviéramos que conformar con lo enviado tendríamos que aceptar 474.000 millones y pensar que vamos a endeudar a nuestras provincias en 100.000 millones más. Y acumulando eso a lo

que venga después, yo creo que el problema se torna casi totalmente inmanejable.

Veamos cuál ha sido el acuerdo entre el señor presidente y los señores gobernadores. El señor presidente habló de 510.000 millones de pesos y ahí se cerró un acuerdo entre él y los gobernadores. Vemos que esta cifra se aproxima mucho más a una realidad, que es el importe que giró la Secretaría de Hacienda. De 474.000 a 510.000 hay una diferencia de 36.000 millones. Pero lo que las provincias deberían haber recibido son 594.000, que desde los 510.000 millones hacen una diferencia de 84.000 millones de pesos. Los gobiernos provinciales se allanan a sacrificar esa diferencia para contribuir a una solución equitativa; aportan ese sacrificio para poder lograr una solución a los problemas de la Nación. Las provincias se conforman con esa solución porque teniendo una cifra establecida y también tal vez un cronograma, pueden armar algún plan para atravesar esta difícil coyuntura.

Con respecto a esos 510.000 millones de pesos argentinos yo quisiera también señalar que deben ser considerados a valores constantes. Hemos hablado con la Secretaría de Hacienda de la Nación, donde nos explicaron que necesariamente debíamos aceptar como índice de actualización el incremento que se pudiera producir en las recaudaciones que obtuviera la Nación. Nosotros entendemos que esto no es cierto, que el monto de la recaudación no significa actualización de ninguna naturaleza. Estamos dispuestos a sacrificarnos y aceptar los 510 mil millones, pero a valores constantes.

En este sentido, también quiero señalarles a los señores senadores del oficialismo que el problema se ha reducido. Se presentará únicamente en los primeros seis meses, porque parece que de ahora en más la inflación tendrá una tendencia declinante, de tal manera que cualquier índice de actualización no va a influir en forma tal que pueda obligar al Estado nacional a realizar emisiones que produzcan efectos inflacionarios. Me parece que en el segundo semestre podremos transitar con mayor tranquilidad que en el primero.

En consecuencia, vamos a proponerle a esta Cámara la sanción de esta ley, en la que hemos previsto estos 510 mil millones de pesos que han sido concertados, actualizados por algún índice. Se ha utilizado algo que representa los precios implícitos y que es justo reconocer en la actualización del importe que estamos peticionando.

Podemos dividir el análisis de este proyecto de ley en dos partes. La primera comprende los artículos 1º a 5º y se refiere al ré-

gimen transitorio de transferencia de fondos del producido de impuestos nacionales a las provincias durante 1985, por 510 mil millones de pesos. La segunda parte, que abarca los artículos 6º y 7º, está relacionada con la contribución del Tesoro nacional para el financiamiento de los déficit provinciales.

En el artículo 1º, señor presidente, se define el propósito de este proyecto al hablar de un régimen transitorio para el ejercicio fiscal 1985, vigente hasta tanto nosotros sancionemos el régimen de coparticipación federal de impuestos.

En el artículo 2º establecemos el monto de la transferencia a realizar, que asciende a la mencionada suma de 510 mil millones de pesos. Fijamos asimismo las formas de financiamiento, comprendiendo la coparticipación federal de impuestos, los aportes no reintegrables del Tesoro nacional y el apoyo para el sistema de seguridad social.

En el artículo 3º se establece el mecanismo de ajuste de las remesas, que se divide en dos partes: una, que es automática, análoga al sistema de distribución de los fondos producidos, que se repartían bajo las reglas de la ley 20.221; y otra, a determinar por el Poder Ejecutivo, hasta completar la dozava parte mensual de la participación que corresponde a cada una de las provincias.

En el artículo 4º se define el método de actualización de los montos, basado, como ya dijimos, en la variación de un índice promedio. Con ello procuramos, según señalamos, mantener el poder adquisitivo de estos 510 mil millones según su valor al 31 de diciembre de 1984.

En el artículo 5º fijamos un término de vigencia de la ley a partir de la caducidad de la ley 20.221, y establecemos el criterio a seguir con las diferencias que surjan de la aplicación de las normas del proyecto en el lapso transcurrido de 1985 y las transferencias realmente efectuadas por la Secretaría de Hacienda.

En el artículo 6º fijamos la contribución del Tesoro nacional para los déficit producidos en 1984, y en el artículo 7º fijamos el plazo para la remesa de los fondos resultantes del artículo 6º con más la actualización correspondiente, y siguiendo el método que habíamos previsto para las transferencias por los 510 mil millones de pesos.

En el artículo 8º hablamos de los distintos procedimientos y facultados al Poder Ejecutivo necesarios dentro del presupuesto a los efectos de a introducir todos los mecanismos que sean necesario hacer viable el cumplimiento de esta ley.

Como podrán observar los señores senadores, se trata de un mecanismo simple, redactado en

ocho artículos, con los que vamos a sortear este período hasta tanto demos sanción definitiva a un proyecto de coparticipación federal y hasta que aprobemos el presupuesto de 1985, en donde quedará absorbido todo este procedimiento, para pasar a regir el que prevean las leyes que acabo de mencionar.

El bloque justicialista cree que con esta ley se pondrá término a la angustiosa situación de las provincias. Por eso apela a la reflexión de los señores senadores, como ocurriría en 1984, para llevar una solución a los Estados que representamos. Se trata únicamente de plasmar un acuerdo que ya existe entre el presidente de la Nación y todos los gobernadores provinciales acerca de la imperiosa necesidad de cubrir el déficit de 1984, de establecer una cifra concreta como apoyo para 1985 y de fijar los términos en que se hará la remisión a las respectivas provincias.

Por todo esto, solicito a los señores senadores el apoyo para que podamos sancionar hoy este proyecto de ley, llevando el alivio que nos están demandando en forma acuciante nuestros gobernadores y nuestras provincias. *(Aplausos.)*

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Formosa.

Sr. Vidal. — Señor presidente, señores senadores: adelanto mi voto positivo a este proyecto de ley, porque entiendo que no puede mantenerse indefinidamente la ausencia de toda norma reguladora del régimen de coparticipación federal.

Representa tal ausencia una grave anomalía de orden institucional, hiere al propio pacto federal —cimiento fundador de la Nación— y agravia elementales principios de administración republicana.

El vacío jurídico producido a partir del 31 de diciembre del año pasado resta claridad a las relaciones entre el poder central y los estados federados. Agrega además motivos de fricción entre las partes constitutivas de la Nación e implica un indebido avance del Ejecutivo sobre atribuciones del Poder Legislativo.

En caso de perpetuarse esta situación implicaría a su vez, por parte de quienes integramos el Congreso Nacional, una indebida cesión de facultades, violatorias de explícitas normas constitucionales.

La gravedad de la cuestión no puede ser disimulada bajo pretextos eufemísticos.

Es obvio que en ausencia de un régimen al que cada una de las provincias haya prestado su adhesión los estados federales recuperen atribuciones que no han sido delegadas en ocasión de suscribir el pacto federal, con lo cual se abre

la posibilidad, por lo menos en el plano jurídico formal, de una total anarquía tributaria. Claro está que la cuestión no se agota en la órbita institucional. Las provincias carecen de toda certeza acerca de los fondos que recibirán en concepto de coparticipación y transferencias no reintegrables del Estado nacional, en momentos justamente en que su situación económico-financiera toca extremos límites.

De no arbitrarse el criterio planteado en el proyecto en discusión, de indexar las sumas pactadas y asegurar la fluidez de los pagos, el compromiso contraído por el presidente de la República con los gobernadores el 8 de enero de este año significará mera letra muerta, con el consiguiente deterioro de la investidura de las partes comprometidas.

Este reclamo provincial no implica ignorar la gravedad de la crisis heredada, tampoco desconocer el ahondamiento sufrido en el curso de los últimos dieciocho meses. Entendemos en ese sentido, que el reconocimiento realizado por el presidente de la República en su discurso del 13 de junio implica una toma de conciencia de la realidad que aporta una cabal descripción del cuadro de situación; pero es obvio que la solución de los problemas que padecemos no puede descansar en el sacrificio de sectores que, como las provincias, ya no tienen nada que sacrificar. La mayor parte de los estados argentinos, especialmente los más pobres, se encuentran con sus finanzas quebradas y ni siquiera están en condiciones de financiar los salarios de sus agentes, mucho menos de atender en condiciones aceptables los servicios esenciales.

Se arguye a veces, desde algunos despachos oficiales, que la solución pasa por el incremento de la presión impositiva de origen provincial, de forma de allegar fondos genuinos a los respectivos tesoros. El argumento utilizado para sostener esa posición es de por sí engañoso y artificioso: se dice que la tributación de origen provincial viene cayendo en los últimos años y se toma para ello como base los años 1980 y 1981, que representaron verdaderos récords en la equivalencia con el producto bruto interno, récords originados en la aplicación de una política de índole regresiva que procuró morigerar el peso de la disminución del déficit fiscal transfiriendo parte de su carga a los estados provinciales, en tanto se agredía a las economías regionales y se llevaba al quebranto a vastos sectores de la actividad.

El intento tropezó, como no podía ser de otra manera, con sus propios límites. Exhausta la capacidad de la base contributiva, las recaudaciones se desmoronaron y las penurias de los

erarios provinciales, sometidos a la doble erosión representada por las dificultades para la percepción de sus ingresos por un lado y el acrecentamiento de los gastos originado en transferencias de servicios por el otro, se agigantaron.

Redondeando males, el avance de la desocupación presiona sobre las nóminas del empleo público, fuente de trabajo casi exclusiva en muchos casos. Catástrofes naturales, tales como las inundaciones sufridas por mi provincia, destruyen activos productivos y se llevan parte de la infraestructura existente, en tanto el crecimiento de la pobreza y de la marginalidad multiplica, finalmente, las demandas asistenciales.

El círculo vicioso de la pobreza refuerza así su trazo, en tanto el gobierno nacional, haciendo caso omiso de tales necesidades, insiste en arrebatar recursos sin advertir el grave debilitamiento de la solidaridad nacional que se viene produciendo, así como tampoco el riesgo cada día más cercano de desintegración nacional.

Sobre este telón de fondo se perfilan los lineamientos de la nueva política económica anunciada hace unos días. Se habla de una sustancial reducción del déficit fiscal mientras que al mismo tiempo se mantendrá relativamente inalterada la magnitud del gasto total. Las variables de ajuste, como tantas otras veces, estarán representadas por los salarios de los agentes de la administración, las partidas de inversión y, según se afirma, las transferencias a las provincias.

No quiero hacerme eco de versiones y rumores, pero no puedo dejar de registrar el hecho de que actualmente se hable de una contracción de las transferencias de la Nación a las provincias del orden de los 600 millones de dólares, equivalentes a un punto del producto bruto interno. Es obvio que ante la falta de información precisa que soportamos los legisladores de la Nación —hemos llegado al mes de junio y ni siquiera contamos con una versión confiable del proyecto de presupuesto— un nuevo escocor de inquietud recorre a todo el interior argentino.

¿Es que cada provincia tendría que aplicar impuestos del tipo de los que actualmente se coparticipan por sí mismos? ¿Es que cada provincia deberá comenzar a emitir su cuasimoneda, como ya pasa en alguna? ¿Es que cada provincia se verá obligada a amenazar con el corte de suministro de bienes esenciales para el desenvolvimiento de la Nación?

Las preguntas que dejo formuladas, señor presidente, no son meros giros retóricos. Representan interrogantes angustiosos que están flotando ahora en estas bancas. Son interrogantes no sólo económicos sino también políticos, en la

acepción más alta del término. La Nación no es simplemente un conjunto de símbolos ni un complejo de connotaciones culturales, históricas e idiomáticas comunes, asentadas sobre una determinada heredad geográfica; es además un devenir que en su fluir tiende a la integración dinámica de los grupos sociales y las regiones geográficas. Cuando ese proceso se interrumpe emergen a la superficie factores objetivos de desintegración.

La nuestra es una Nación aún desintegrada por la persistente recurrencia de ese fenómeno, característico del subdesarrollo al que los técnicos de los organismos internacionales denominan —correctamente con cierta connotación eufemística— dualismo social y territorial.

En un polo, en el caso argentino, en el macrocefálico eje gran bonaerense, se concentran formas económico-sociales relativamente complejas y modernas. En el otro, se enseñoorea el atraso con todas sus secuelas. En este último encuadramos a casi todo el interior, es decir, a todas las provincias más empobrecidas.

El retaceo de la coparticipación, el discrecionalismo del Ejecutivo, el intento de cargar el costo de la crisis sobre las finanzas provinciales juegan dentro de ese cuadro a favor del ahondamiento de la desintegración de la que venimos hablando. Representan, en un análisis objetivo, actos contra la Nación, debido a que atentan contra el dinamismo del proceso de integración.

Señor presidente: hemos puesto nuestra firma en este proyecto y le daremos nuestro voto afirmativo. Sabemos que la propuesta que hoy trata esta Cámara no pasa de un mero paliativo, en espera de la legislación definitiva que deberá votarse lo más pronto posible. Sabemos también que ni siquiera esa legislación será suficiente para resolver el problema, pues su naturaleza no radica en el plano de las relaciones jurídicas entre la Nación y sus estados constitutivos, sino que se aloja en el concreto tejido de los hechos económico-sociales.

Pero plantear este reclamo implica poner al desnudo una de las aristas más agudas de la crisis argentina y denunciar la falencia de la actual orientación económico-social.

No saldremos de esta gravísima crisis que nos agobia apelando a supuestas panaceas monetaristas. Urge adoptar ya mismo un programa de ajuste y de expansión en cuyo contexto armonicen las medidas de saneamiento con la movilización de ese potencial de riquezas, que constituye la mejor garantía para que la Argentina pueda resurgir de sus crisis.

En ese marco, el Estado nacional podrá reducir su gigantesco dispendio y liberar recursos

para auxiliar a las provincias necesitadas, no sólo con transferencias de la Tesorería, sino también con obras de infraestructura que potencien el soporte de su vida económica y las integren efectivamente al mercado nacional.

Los estados federales recibirán además el beneficio derivado de la creación de polos inductores de riqueza y de la ampliación del mercado interno disponible para sus producciones regionales. Como corolario de todo ello se fortalecerá la base contributiva.

De lo contrario, seguiremos tironeando de una manta, cuya insuficiencia se torna cada día más evidente, con riesgos de conflictos y de la recreación de las viejas antinomias entre el interior y el poder central.

Aceptamos entonces que ésta no es la solución de fondo, pero entendemos que es el puente indispensable para atender a la subsistencia —precaria subsistencia— de las administraciones provinciales. El gobierno nacional debe entender, en este sentido, que las finanzas provinciales no pueden ser la variable de ajuste de esquemas supuestamente antiinflacionarios, diseñados en la Capital, con abstracción de las necesidades, dramas y angustias de ese país real, donde la evidencia del subdesarrollo es más honda y más patética.

Por las razones expuestas dejo fundado mi voto favorable al proyecto presentado por el señor senador Villada.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

Sr. Trilla. — He escuchado con mucha atención a los dos senadores preopinantes que han defendido, con elocuencia y fundamentos sólidos, la posición descrita en el articulado del proyecto de ley que estamos tratando.

En primer lugar, el señor senador Villada ha dado una cantidad de datos importantes respecto de cifras del presupuesto anterior y sobre las posibles sumas del presupuesto para este año, que consideramos en la correspondiente oportunidad. Al respecto, estimo que hasta ese entonces transcurrirá el tiempo necesario como para analizar en detalle todas las particularidades que permitan conjugar las finanzas del Tesoro nacional con las provinciales.

También es cierto que el señor senador Villada ha basado parte de su argumentación en un artículo publicado por un diario de hoy o de ayer, en donde se mencionan las dificultades de las provincias y los montos probables de déficit, para cuya cobertura tendría que concurrir el Tesoro nacional. Pero si mal no recuerdo el texto de este artículo —no lo tengo en mi poder— se asevera que la cantidad de em-

pleados públicos de las provincias habría excedido el número correspondiente a diciembre de 1983. Si bien no puedo afirmar que esto sea cierto, igual actitud debo adoptar con respecto a la otra cifra correspondiente al déficit de presupuestos totales de las provincias. Pero esto lo debo tomar con los mismos beneficios de inventario.

Recuerdo uno de los datos citados referido a que en Tucumán hay seis mil empleados públicos más que en 1983; y también tengo presente que este artículo fue traído a este recinto para apoyar el proyecto en cuestión.

Tendríamos, entonces, que el costo que insuñarían estos seis mil empleados anualmente llegaría a una cifra de 15 mil millones de pesos, es decir, 15 millones de australes. Si esa cifra la proyectáramos a todos los distritos tendríamos, como consecuencia, un exceso en los sueldos pagados a los empleados públicos con respecto a las cifras equivalentes a moneda constante en diciembre de 1983. Esto es, alrededor de 300 mil millones de pesos, es decir, 300 millones de australes. Estas cifras son realmente crudas, realistas. Creo que debemos considerar los graves problemas económicos que tenemos y que fueron relatados in extenso por el señor senador Vidal. Entiendo que ellos deberían ser conversados, discutidos, analizados y confrontados con las distintas opiniones y, fundamentalmente, con la nuestra y en la oportunidad que corresponde. Se trata de la única observación que quiero hacer al señor senador Vidal.

Sra. Rivas. — ¿Me permite una interrupción, señor senador?

Sr. Trilla. — Como no, señora senadora, si justamente hubo una alusión a la provincia de Tucumán. Pero quiero aclarar que me he referido exclusivamente al mismo artículo al que se remitió el señor senador Villada para fundamentar su opinión. Repito que no sé si son ciertas las cifras mencionadas, pero si pienso que una cifra es verdadera no tengo por qué dudar de la otra tampoco. Creo que eso es lo relevante.

Sra. Rivas. — Al respecto, quiero decir que no es exacta la cifra referida a la cantidad de obreros o empleados que han ingresado a partir de diciembre de 1983 en Tucumán. Probablemente hay un cero de más.

Sr. Trilla. — Me alegro, porque eso achica las diferencias que puedan existir. Como dije, no conozco datos en forma exacta.

Ese artículo del matutino que sirvió para los argumentos del senador Villada, indica que merece la totalidad de las referencias escuchadas.

Sr. Martiarena. — No conocemos el aumento de las cifras a nivel nacional.

Sr. Trilla. — No lo conocemos pero podemos saber que habrá tantos capitalinos, jujeños o santiagueños, por ejemplo, que han ingresado a la administración nacional y, seguramente estos últimos siempre son más que los capitalinos.

Casualmente, como se habló de la macrocefalia de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, quiero decirles que este tema, muchas veces mencionado en este recinto, merece ser defendido en este momento porque casualmente fueron dos grandes porteños quienes se opusieron con tenacidad a la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, previendo lo que podía llegar a ocurrir en el futuro, especialmente en cuanto al deterioro del federalismo.

Uno de esos porteños fue Leandro N. Alem, que defendió con gran dialéctica y actitud federalista la posición de no federalizar a la ciudad de Buenos Aires. Lo hizo a través de los famosos discursos en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires cuando se trató la cesión de las tierras que iban a limitar el distrito de la Capital Federal.

El otro gran porteño que defendió esa posición, no ya a través de las ideas sino usando de las armas, fue Carlos Tejedor, oponiéndose a que la ciudad de Buenos Aires fuese declarada Capital de la República.

De modo que esta cuestión alcanza a todos los hombres del país y no sólo a los porteños. De cualquier manera, es una anécdota complementaria que sólo mencioné para defender un poco a los oriundos de esta ciudad.

Quiero seguir refiriéndome al tema central que estamos debatiendo. Al comienzo de esta sesión me dirigí a la Presidencia para solicitar la postergación de la preferencia, a fin de que tratáramos el asunto en la próxima semana. Fundamentalmente esa posición en las conversaciones que se van a mantener en los días venideros, que son continuación de otras reuniones realizadas con anterioridad, entre los responsables superiores de la conducción económica y financiera del país y los señores gobernadores. También fuimos convocados a esos encuentros diputados y senadores vinculados con el estudio del tema, para que podamos comunicarnos entre todos a través de un lenguaje común.

De esa manera podemos obtener mayores elementos para definir el asunto, en el entendimiento de que considerar el tema esta semana o la próxima no varía demasiado la cuestión. Además, daremos lugar a lo que todos proclamamos, es decir, el diálogo de la República, por medio del cual aseguraremos no sólo la convivencia de las instituciones sino también la de

los espíritus, apoyándonos en ese diálogo como el mejor sistema de convivencia entre los hombres.

Postergando la consideración del asunto, se puede ganar tiempo, por el contrario. Si no se llega a ningún acuerdo entre quienes tienen la responsabilidad de la conducción de las finanzas del Estado y, por otra parte, la administración de los tesoros provinciales, entonces si este Senado debería proseguir con el curso del proyecto de ley, sin haber perdido tiempo, y oportunidad.

Basándome en las mismas argumentaciones del senador Villada, señalo que lo que se propone es absolutamente transitorio porque cuando analicemos el presupuesto para 1985 veremos que esa norma será, en definitiva, la que dicte las pautas de financiación que el Tesoro nacional otorgará a las provincias.

Por lo mencionado, sostengo que es posible un entendimiento maduro y razonable sobre este tema. Si el proyecto resultara aprobado por el Senado, teniendo en cuenta su tratamiento por el cuerpo y los posibles vericuetos futuros que puede seguir, creo que de ninguna manera podría anticiparse a la presentación del presupuesto para el año en curso por parte del gobierno nacional.

Por eso creo que no será una solución, como se ha pretendido decir en el curso del debate, de carácter inmediato para las provincias porque, reitero, su tratamiento se dilata y diluye en la consideración del presupuesto. Por eso me parece una actitud adulta que permitamos el diálogo a través de las reuniones que mencioné hace un momento y demoremos una semana la consideración de este tema, habida cuenta de que, de aprobarse el proyecto de ley, no tendría una vigencia efectiva. Además, una disposición de esta naturaleza, como consecuencia de la propia hermenéutica jurídica y legislativa, debe estar incorporada en el presupuesto nacional, al que van a agregarse estos y otros elementos en el que tanto la Cámara de Diputados como este Senado tendrán una participación manifiesta, lógica e importantísima en los aspectos relativos a los gastos y a la forma en que se realizan los aportes del Tesoro al sector público, incluidas las provincias.

Ese será el momento de responder al senador Villada las observaciones que efectuó sobre el producto bruto interno, ya que contaremos entonces con los datos ciertos dados por el gobierno.

En los últimos días, como se reconoció en el recinto, mantuvimos reuniones en la Comisión de Presupuesto y Hacienda para analizar ese tema. Participaron de ellas senadores de las dis-

tintas bancadas, incluso de las que no están representadas en la Comisión, que fueron invitadas especialmente. Esperamos que alguna vez se solucione este problema de la falta de representación de esas bancadas. Pero este es tema de otro debate.

En aquellas reuniones habíamos considerado la posibilidad de que existieran proyectos de alternativa. Analizamos las posiciones de los distintos senadores y los proyectos por ellos presentados; en mi caso, desde luego, también lo hice con las autoridades económicas de la República.

Con respecto al proyecto de la bancada justicialista, se pensó que era mejor hablar de una prórroga de la ley sobre coparticipación federal de los impuestos que caducó el 31 de diciembre del año pasado, con las modificaciones introducidas como consecuencia de leyes sancionadas el año pasado que aumentaban los fondos de la coparticipación por haber comenzado a eliminarse algunos factores urticantes, como la atención del servicio de seguridad social, tanto con respecto a las jubilaciones como al FONAVI.

Pero se avanzó aún más y se habló de eliminar totalmente en el actual ejercicio el destino de parte de los fondos —coparticipado— para atender el servicio de seguridad social.

Recordarán los señores senadores que en 1984 sancionamos una ley por la que se establecía un aporte patronal del 7,5 por ciento mensual a los ingresos con destino jubilatorio, sabiendo que este porcentaje no era suficiente para cubrir totalmente el servicio de seguridad social. De manera que seguía extrayéndose el resto de las necesidades de la coparticipación federal. Se pretendía que esta extracción concluyera el primero de enero de este año, a fin de que la totalidad de los fondos de coparticipación federal se distribuyeran en la forma pactada, es decir, Tesoro nacional, tesoros provinciales y Fondo de Desarrollo Regional.

Por otra parte, se tuvo en cuenta también la posibilidad de considerar los déficit provinciales de 1984 —respecto de lo cual sé que la tarea está avanzada en lo que concierne al Ministerio de Economía de la Nación y las respectivas áreas de cada provincia— a fin de determinarlos con exactitud en razón de las pautas salariales y de las circunstancias que hacen a la técnica de la relación entre los respectivos tesoros.

Se consideró además la redacción de un artículo previendo el cumplimiento de la financiación del presupuesto de 1985 en razón de los llamados adelantados del Tesoro nacional. Todo esto se refiere a un proyecto que fuimos anali-

Desde luego que las cifras manejadas en la prórroga de la ley anterior, con las modificaciones apuntadas, significaban mantener a las provincias con una automaticidad de recepción de importes como consecuencia de la propia hermenéutica de la ley considerada, que en primer lugar estaba beneficiada porque no se retraía ningún otro concepto previo a la división de fondos para el Tesoro nacional, para los tesoros provinciales y para el Fondo Nacional de Desarrollo.

Oportunamente entraremos al tema del plan económico y a sus consideraciones particulares; no es este el momento para atacar o contestar las referencias efectuadas con relación a ese plan. Pero lo que sí podemos afirmar es que como consecuencia de ese plan también se obtendrá un beneficio porque al no existir los índices de inflación tan elevados, las cifras no se irán convirtiendo en tan perversas por el efecto inflacionario.

Asimismo, como consecuencia de razones de orden técnico y de manejo de cifras mayores, la existencia de una estabilidad monetaria va a permitir un cumplimiento más fluido por parte de los contribuyentes y eso también traerá aparejado un beneficio en los fondos de coparticipación, en razón de un mejor comportamiento contributivo.

Aún están en discusión las cifras que responden a los déficit de los presupuestos provinciales de 1984 como consecuencia de no disponerse de los aspectos técnicos, aunque se hace referencia a un preacuerdo establecido en ciertas planillas y donde se mencionan las cifras que podrían recibir cada una de las provincias, a través de los anticipos del Tesoro nacional. Pero éste es precisamente el tema que va a tratarse próximamente entre el gobierno nacional y los gobiernos provinciales. De esta manera, si se hubiera prorrogado esta discusión para la semana próxima habríamos contado con los datos completos y habríamos podido presentar un proyecto, el que en el curso de su discusión habría podido resultar aprobado o rechazado, y entonces ser apoyado o no por la bancada justicialista y por otros sectores. Pero es evidente que en ese momento se dispondría de más elementos para analizar en profundidad esta cuestión.

Debemos permitir el diálogo, este gran vocablo que hace estremecer a los argentinos en momentos tan difíciles pero tenemos que aceptar el compromiso de agotar las últimas instancias para tratar de obtener los consensos necesarios en el momento de votar los proyectos de ley. Acepto la opinión de los juristas y lo que puedan decir los abogados en esta materia en el

sentido de que las leyes son iguales, hayan sido apoyadas por el 51 por ciento de los votos o por un porcentaje mayor, pero sustancialmente tienen mayor valor cuando cuentan con el consenso casi unánime pues su cumplimiento se ve facilitado.

Por lo expuesto, nuestra bancada va a votar en contra del proyecto en consideración y por los motivos y circunstancias que se acaban de mencionar, no ha presentado otro proyecto alternativo.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

Sr. Villada. — Hemos analizado exhaustivamente este tema relativo al régimen transitorio de coparticipación por lo que considero que debemos pasar a la votación.

Sr. Presidente (Otero). — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa.

Sr. Presidente (Otero). — En consideración en particular.

—Se leen y aprueban los artículos 1º a 5º.

—Se lee el artículo 6º.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

Sr. León. — Señor presidente: antes de que concluya la votación quiero manifestar que el bloque de la Unión Cívica Radical está contribuyendo al quórum convencido de que muy pronto vendrá al Congreso el proyecto de ley de coparticipación federal que todos estamos reclamando.

Sr. Presidente (Otero). — Se va a votar el artículo 6º.

—La votación resulta afirmativa.

—Se leen y aprueban los artículos 7º y 8º.

—El artículo 9º es de forma.

Sr. Presidente (Otero). — Queda sancionado el proyecto de ley. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados.

MOCION

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Teniendo en cuenta la escasa concurrencia en las bancas, voy a solicitar al cuerpo un cuarto intermedio hasta mañana a las 17 para tratar los temas que quedan pendientes. Entiendo que ésta es una situación que puede ser contemplada por el Honorable Sena-

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Señor presidente: a título personal voy a oponerme al cuarto intermedio. Está previsto con preferencia para esta semana —y estamos en un día de la semana— el tratamiento del proyecto de declaración que hemos presentado con varios senadores de nuestro bloque en relación con el decreto 1.096/85. Estimo que al haber número se debe abordar el tratamiento de ese tema. No se puede postergar por ningún motivo, sobre todo cuando los señores senadores de la bancada radical se han retirado teniendo conocimiento de la existencia de asuntos con preferencia para esta sesión.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

Sr. Rodríguez Saá. — Ratifico en nombre del bloque justicialista las expresiones del señor senador por Jujuy. Nos oponemos al cuarto intermedio y pedimos que se cumpla con la preferencia ya dispuesta.

Sr. Nápoli. — Señor presidente: entiendo que mi pedido no significa violar el compromiso contraído, pues se había hablado de tratar ese tema en esta semana, y el cuarto intermedio sólo significa una postergación hasta mañana.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Jujuy.

Sr. Martiarena. — Sólo para contestar ese argumento. Hoy es un día de esta semana y tenemos quórum. No vemos motivos para dejar de tratar un tema de semejante trascendencia, sólo porque por razones que no quiero suponer ni menos conocer, algunos señores senadores se han retirado sabiendo que había preferencias pedidas para hoy.

Sr. Presidente (Otero). — Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

Sr. Nápoli. — Sólo para manifestar que por compromisos contraídos con anterioridad, varios senadores de nuestro bloque se han tenido que retirar, pero eso no significa de ninguna manera rehuir el debate. Entiendo que no hay inconveniente en discutir ese proyecto ahora, teniendo en cuenta la argumentación del señor senador por Jujuy, pero de todas maneras les pido con toda cortesía que accedan a nuestro requerimiento.

Sr. Martiarena. — Que se vote.

Sr. Presidente (Otero). — Se va a votar la moción de pase a cuarto intermedio formulada por el señor senador por Río Negro.

—La votación resulta negativa.

Sr. Presidente (Otero). — Queda rechazada la moción.